

INFORME SECRETARIAL

RAD. 2012-00294.

Pasó al Despacho de la Honorable Juez **MARIA ISABEL CIFUENTES SIERRA**, hoy veintitrés (23) de septiembre de 2021, el **EXPEDIENTE** de la referencia:

Poniéndole de presente que se observa escrito presentado por la parte ejecutante, en el que solicita al Despacho que se libre mandamiento de pago en contra el demandado. Que en la sentencia emitida por el despacho se condenó a las mesadas retroactivas en suma de **\$149.524.513**

Que el apoderado señala en su escrito que se le efectuó pago de la condena en suma equivalente a **\$128.487.375** mediante resolución ADP002282 DEL 5 DE MAYO DE 2020 y que está pendiente la suma de \$21.037.138 más indexación y costas ordinarias.

DIANA MARGARITA MENDOZA FUENTES
SECRETARIA



REPUBLICA DE COLOMBIA JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO SANTA MARTA - MAGDALENA

Santa Marta, veintitrés (23) de septiembre de 2021.

REF.: PROCESO EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUIDO POR ALMA ROSA PEREZ ROVIRA CONTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP RAD. 2017-473.

Visto el informe secretarial que antecede, el despacho procede a pronunciarse previas los siguientes;

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones:

La señora **ALMA ROSA PEREZ ROVIRA** a través de apoderado judicial presentó demanda ejecutiva a continuación de un ordinario contra la **UGPP**, con el fin de que se librara orden de pago por las condenas referidas en la sentencia del 13 de junio de 2018, de primera instancia.

2. Hechos.:

2.1. El Despacho a través de providencia de fecha 13 de junio de 2018, condenó al demandado al reconocimiento y pago de mesadas retroactivas e indexación.

2.2. Posteriormente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta – sala Laboral, mediante sentencia de fecha 23 de enero de 2020, confirmó la decisión proferida por este juzgado.

II. CONSIDERACIONES:

1. Pretensión.

Pretende la parte ejecutante se libre orden de pago a favor de la señora **ALMA ROSA PEREZ ROVIRA** y a cargo de la **UGPP** por las condenas impuestas en primera instancia.

2. Problema Jurídico.

El problema Jurídico, a entrar a determinar si la sentencia de fecha 13 de junio de 2018 proferida en esta instancia, es exigible en los términos del artículo 117 del C.C.A, y en consecuencia se puede librar orden de pago.

Para abordar esta problemática, es necesario entrar a dilucidar lo referente a la ejecución de las condenas contra entidades públicas, y entidades territoriales.

3. Fundamento Jurídico.

El artículo 145 del CPC establece lo siguiente:

Artículo 145. Aplicación analógica. *A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial.*

El artículo 307. Del Código General del Proceso.

“Ejecución contra entidades de derecho público. *Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración”.*

Y el artículo 177 del CCA. *“Enseña que cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial, o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviara inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada. Y en inciso 4 reza que será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”. (derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011).*

4. Caso Concreto.

En este caso, el título ejecutivo lo es la sentencia de primera instancia de fecha 13 de junio de 2018, que dispone:

PRIMERO: *CONDENAR a favor de la señora ALMA ROSA PEREZ ROVIRA, en calidad de compañera permanente del afiliado fallecido ALFONSO SEGUNDO GRANADOS ORTEGA*

SEGUNDO CONDENAR a la UGPP al reconocimiento y pago a favor de la señora ALMA ROSA PEREZ ROVIRA de las mesadas pensionales causadas y no canceladas a partir del 11 de diciembre de 2014 hasta el 31 de mayo de 2018 en la suma total de \$149.524.513, más las mesadas que se sigan causando hasta hacer efectiva su inclusión en nómina.

TERCERO: CONDENAR a la UGPP al pago de la indexación del monto señalado en el numeral segundo, conforme a la formula expuesta en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de las mesadas causadas antes del 11 de diciembre de 2014.

QUINTO: ABSOLVER a la demandada de los intereses moratorios solicitados.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada.

Sentencia que fue objeto de recurso de apelación y el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta - Sala Laboral, mediante sentencia del 23 de enero de 2020, confirmó la decisión de primera instancia.

De dicha sentencia emana una obligación clara y expresa. La discusión podría girar en torno al requisito de la exigibilidad, contemplada en el artículo 177 del C.C.A y el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo para esta funcionaria el requisito de exigibilidad se encuentra satisfecho, toda vez, que para la ejecución de sentencia judicial contra **UGPP**, no se estiman los 10 meses señalados en la norma.

En el presente caso se puede advertir que la UGPP no es una entidad territorial, razón por la cual no se encuentra amparada con el plazo de los 10 meses que terminó la ley y por ende puede ejecutarse una vez quede ejecutoriada la sentencia respectiva.

Aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que estamos frente una sentencia de carácter judicial cuya obligación es de carácter pensional esto es, relacionada directamente con un derecho fundamental.

5. De La Medida Cautelar

El principio de inembargabilidad no es absoluto. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, dispone que son inembargables entre otros, “1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, y 2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas reservas...”.

La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, con respecto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, enseña que tal principio no puede ser considerado absoluto.

Ha sostenido la Corte Constitucional que el principio de inembargabilidad de los bienes y recursos del Estado tienen sustento constitucional tendiente a asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de efectivizar materialmente los derechos fundamentales, así

como el cumplimiento de los distintos cometidos estatales. En otros términos, este principio que se predica del presupuesto de los órganos y entidades del Estado, propende por la protección de los recursos financieros, destinados a la satisfacción de los requerimientos indispensables para realizar la dignidad de la persona humana. (Sentencias C-546 de 1992, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C-354 de 1997, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y C-192 de 2005).

Pero al mismo tiempo, la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha sostenido que el principio de inembargabilidad del presupuesto de las entidades y órganos del Estado encuentra algunas **excepciones, así: (i)** cuando se trate de créditos laborales, cuya satisfacción se hace necesaria para realizar el principio de dignidad humana y efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (sentencia C-546 de 1992, línea jurisprudencial reiterada en las sentencias C-013 de 1993, C-107 de 1993, C-337 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, T-025 de 1995, T-262 de 1997, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003 y T-1195 de 2004); **(ii)** cuando se trate de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas decisiones judiciales (sentencia C-354 de 1997, T-531 de 1999, T-539 de 2002 y C-402 de 1997), y, **(iii)** cuando se trate de títulos que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible (sentencias C-103 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-531 de 1999 y T-539 de 2002).

La excepción al principio de inembargabilidad derivado de la efectividad de la cancelación o pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de relaciones laborales impone la posibilidad de embargar los bienes y recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación, debido a que los derechos laborales son materia privilegiada y por ende la especial protección que se prodiga de los mismos por parte del Estado. Es entonces, la especial protección que la Carta Política otorga al derecho al trabajo por su carácter de valor fundante del Estado Social de Derecho, que surge esta excepción constitucional a la inembargabilidad del presupuesto.

De la misma manera, la excepción de inembargabilidad derivada de los derechos contenidos en sentencias judiciales y en títulos en los que se incluya una obligación clara, expresa y actualmente exigible, propugnan por la garantía, del principio de la seguridad jurídica, así como por el respeto de los derechos reconocidos a las personas en los aludidos títulos ejecutivos.

La sala Laboral del Tribunal Superación de Santa Marta en proveído de fecha 31 de agosto de 2012, radicación No. 00454/12 expresa que:

“Empero, este Tribunal postula la tesis de que tal inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Pensiones no es absoluta. Se rompe la regla general impuesta por la norma en los eventos en que con el embargo de tales recursos se busque el pago de pensiones. La defensa de esta propuesta es sumamente sencilla y demasiado simple: si estos recursos se protegen a través del expediente de tornarlos inembargables, justamente para garantizar que con ellos se logre el pago efectivo y oportuno de las pensiones (vejez, invalidez y sobrevivientes) y no se tomen para el cubrimiento de otros rubros, no tiene sentido que se potencie la prohibición cuando el proceso ejecutivo y la consecuente medida cautelar se ha producido para obtener los recaudos monetarios indispensable para conseguir la satisfacción efectiva de pensiones, cuyo pago no se ha obtenido que lo haga voluntariamente el deudor y que ha colocado al acreedor en la imperiosa necesidad de acudir a la ejecución forzosa y a los mecanismos legítimos de coerción y de compulsión.

Claro que si al ejecutivo y a la medida cautelar los guía el designio de conseguir el pago de pensiones, nada sería más injusto que pretender atajar tal cometido con una prohibición de inembargabilidad que, en esa hipótesis, carece de toda significación, porque es palmar que se utilizan los recursos del sistema en plena correspondencia con su natural vocación: la de cubrir las pensiones.”

6. Conclusión.

Del título ejecutivo que se encuentra en el expediente, resulta que la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP**, adeuda a la señora **ALMA ROSA PEREZ**, lo siguiente:

-Mediante resolución ADPOO2282 del 5 de mayo de 2020, se dispuso el reconocimiento de la obligación señalada en este despacho en sentencia del 13 de junio de 2018.

-Según las condenas por mesadas retroactivas impuestas en la sentencia se tiene una obligación de **\$149.5240.513**

-Que de la documentación aportada y a lo manifestado por el apoderado de la parte demandante, se puede establecer con meridiana claridad que la UGPP pagó a la demandante la suma de **\$128.487.375, quedando un saldo pendiente a favor de \$21.037.138.**

- Por concepto de mesadas retroactivas pendientes a favor de la demandante la suma de **\$21.037.138.**
- Por concepto de indexación causada del 13 de junio de 2018 a septiembre de 2021 la suma de **\$2.239.526,12**

INDEXACIÓN					
Nº	VALOR HISTORICO	INDICE FINAL	INDICE INICIAL - JUN/18	FACTOR	INDEXACION
1	21.037.138,00	109,86	99,29	1,1064558	2.239.526,12
TOTAL INDEXACIÓN				2.239.526,12	

- Por concepto de costas ordinarias la suma de **\$10.460.000**

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:

En memorial aparte el apoderado solicita se libre oficio de embargo por las condenas impuestas en la sentencia.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la ejecutante no señala las entidades bancarias sobre las cuales deben pesar las medidas de embargo, esta agente judicial desatiende la solicitud toda vez que el memorialista **debe indicar** el nombre de cada una de las entidades bancarias en las que tenga cuenta el demandado UGPP.

Por lo que se debe librar mandamiento de pago por la suma total de **\$33.736.664,12**, más costas del proceso ejecutivo. Cantidad expresa y clara y actualmente exigible, para que sea procedente el mandamiento de pago por vía ejecutiva solicitado (Art. 100 y 101 del CST y S.S. y Art. 488 del C.P.C).

R E S U E L V E:

PRIMERO: Librar orden de pago contra la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL UGPP** y a favor de **ALMA ROZA PEREZ ROVIRA**, por la suma de **\$33.736.644,12** por los siguientes conceptos:

- Por concepto de mesadas retroactivas pendientes a favor de la demandante la suma de **\$21.037.138.**
- Por concepto de indexación causada del 13 de junio de 2018 a septiembre de 2021 la suma de **\$2.239.526,12.**
- Por concepto de costas ordinarias la suma de **\$10.460.000.**

SEGUNDO. -NOTIFÍQUESE el presente proveído conforme a lo previsto en el artículo 306 del CGP.

TERCERO: MANTÉNGASE en secretaría el expediente hasta tanto no se venzan los términos para que el ejecutado presente excepciones.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



MARIA ISABEL CIFUENTES SIERRA
Jueza

JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO.
Santa Marta. – En la fecha 24 de septiembre de 2021, se notifica el auto precedente por ESTADOS N° 62, fijados a las 08:00 a.m.

Secretario (a)